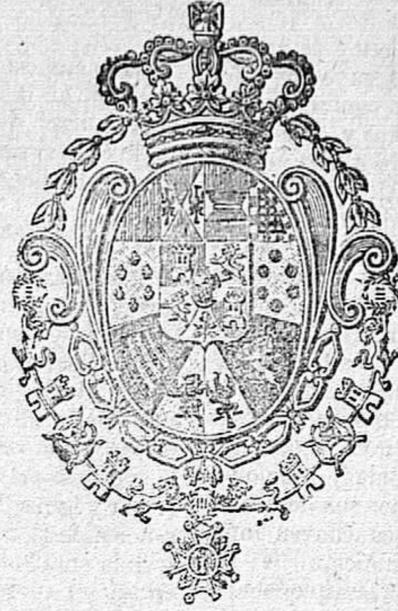


CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

	Pesetas
Un año dentro y fuera de la capital	10
Un semestre id. id.	6
Un trimestre id. id.	4
Números sueltos	0.25

Se publica todos los dias excepto los domingos.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte dias de su promulgacion, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgacion el dia en que termine la insercion de la ley en la *Gaceta*. (Artículo 1.º del Código civil.)

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (q. D. g.), y Augusta Real Familia, continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

GOBIERNO DE PROVINCIA

CIRCULAR

Los señores Alcaldes, fuerza de la Guardia civil, agentes de vigilancia y demás dependientes de mi autoridad procederán a la busca y captura de los presos fugados de la cárcel de Villaviciosa el 25 de Diciembre último, cuyos nombres y señas a continuación se expresan, reclamados por el Ilmo. Sr. Director general de Establecimientos penales, poniéndolos a disposición de este Gobierno caso de ser habidos.

Isidro Soslozano Varela.

Edad 27 años.

Hijo de Ventura y de Inés, natural de Barcida, vecino de Gijón, oficio tahonero, con instrucción.

Estatura 1'600 milímetros.

Peso 44 kilos.

Ojos claros.

Pelo castaño.

Sin ninguna cicatriz.

Emilio Menendez Gonzalez.

Hijo de Juan y de Modesta, natural y vecino de Cangas de Onís. Soltero, carpintero.

Edad 23 años.

Con instrucción, estatura 1'630 milímetros, peso 61 kilos.

Ojos y pelo negros.

Sin ninguna cicatriz.

Orense 26 de Enero de 1893.

El Gobernador,

ANTONIO LLAMAS NOVAC.

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador civil de la provincia de Lérida y la Audiencia territorial de Barcelona, de los cuales resulta:

Que por escritura pública de 15 de Febrero de 1876 don Joaquín Garí é Isern, en nombre propio, y como apoderado de su consorte doña Lucía Riqué y Carbonell, vendió perpétuamente a don Ramon Mestre y Safont una pieza de tierra sita en el término de Lérida y partida llamada de *Paradins baixes*, en cuya finca se entraba por la parte de Poniente por un camino de carro que parte desde la carretera de Corbius, y por la de Oriente por la senda ó camino de caballería de la fuente de San Jerónimo, cuya finca de tierra se dijo ser libre de censo, censal y de toda otra carga.

Que don Ramon Mestre y Sanfont en 11 de Septiembre de 1891 formalizó ante Notario público un requerimiento dirigido a don Jaime Arnau y Moncasi, en el cual dijo que con instancia de 25 de Febrero de aquel año el requerido Arnau solicitó la autorización de la Junta de cequiaje de la ciudad de Lérida para construir un puente sobre el brazal cosser al efecto de facilitar el paso a la finca conocida por Torre de Fuster, habiéndose concretado dicha Junta a autorizar la construcción sin reconocer ni prejuzgar con ello la existencia de servidumbre ni derecho de paso alguno; y que el requerido llevó a efecto la construcción del puente de mampostería, utilizando luego el paso por el mismo para entrar en la finca conocida por Torre de Fuster; sin previa autorización del requirente, propietario exclusivo de dicho camino, por lo que le requería para que inmediatamente procediese al derribo del puente y se obtuviera en lo sucesivo de pasar a pie, con caballería ni con vehículo alguno por el camino de exclusiva propiedad del requirente, y que en el acto de la notificación del referido requerimiento, que tuvo lugar el 17 del mismo mes de Septiembre, contestó don Jaime Arnau que respecto al uso del camino desde el momento que le indicó el requirente que no hiciese uso de él, no

había vuelto pasar por allí, y había dado órdenes terminantes a sus dependientes para que se abstuviesen de pasar por dicho camino, y él solo había pasado por allí durante la concesion que le había hecho el requirente; que respecto al puente construido lo había inutilizado haciendo una pared en la desembocadura del mismo al camino; que si lo construyó, fué en el cajero de la acequia del cual no era dueño el requirente, sino la Junta de cequiaje, la cual dió permiso para construirlo y que hacia todas estas manifestaciones sin que se entendiese que reconocía por único dueño de dicho camino al requirente, y que si tenia el requerido derechos y servidumbres en él, los salvaba:

Que en una comunicacion de la Junta de cequiaje de Lérida a don Ramon Mestre y Safont, en contestacion a una instancia de éste, se hace constar que don Jaime Arnau había solicitado permiso de aquella Corporacion para construir un puente sobre el brazal *cosser*, al efecto de facilitar el paso a una finca de su propiedad, y la Junta, atemperándose a lo dispuesto en el capitulo 86 de las Reales Ordenanzas, se concretó a autorizar al requirente para la construcción del mencionado puente:

Que en 5 de Octubre de 1891 presentó el Procurador don Rafael Fábrega, a nombre de don Ramon Mestre, en el Juzgado de primera instancia de Lérida una demanda de interdicto de retener y recobrar contra don Jaime Arnau, pidiendo se le apercibiese y requiriese para que derrubara dentro del tercero dia el puente que había construido sobre el brazal *cosser*, y que se abstuviese en lo sucesivo de perturbar la posesion a que decia Mestre tener derecho. Con la demanda se presentaron los documentos de que queda hecha mencion, y se fundaba en los hechos que en los mismos se refieren; que dada la demanda la tramitacion correspondiente, dictó el Juez sentencia en 6 de Noviembre de 1891, declarando haber lugar al interdicto, y mandando en su consecuencia el derribo del puente:

Que habiendo apelado de esta sentencia el demandado Arnau, y admitida la apelacion en ambos efectos, fué requerida de inhibicion la Sala de lo criminal de la Audiencia territorial de Barcelona por el Gober-

nador civil de la provincia de Lérida, a instancia de la Junta de cequiaje de la misma ciudad, y de acuerdo con la Comision provincial, fundándose la Autoridad administrativa en que, según el art. 26 de las Ordenanzas para el gobierno y administracion de las acequias de la ciudad de Lérida, que corren a cargo de la Junta de cequiaje, así como los brazales necesarios para la distribucion de las aguas, es atribucion exclusiva de la misma conceder permiso para la construcción de puentes, canales de piedra ó madera, diques y paradas sobre los cajeros ó márgenes, los cuales, según el art. 81, deben conservarse con la consistencia y fuerza necesarias para contener las aguas y evitar que se rompan con el peso de ellas, pudiendo imponer multas a los infractores y obligar a éstos a deshacer las obras que hubieran realizado sin la autorizacion competente, y por lo tanto, que el acuerdo concediendo permiso a D. Jaime Arnau, ha sido tomado por la Junta de cequiaje, dentro de sus atribuciones, en un asunto de su exclusiva competencia, según el núm. 7.º del art. 237 de la vigente ley de Aguas; que según el art. 252 de la propia ley, contra las providencias dictadas por la Administracion dentro del círculo de sus atribuciones en materia de aguas, no se admitirán interdictos por los Tribunales de justicia, excepto en los casos en que a la expropiacion forzosa no hubiese precedido indemnizacion oportuna, y por lo tanto, que el Juzgado de primera instancia no debió admitir la demanda de D. Ramon Mestre, pues su admision conduce únicamente a que una Autoridad judicial decreto lo contrario de lo acordado por otra administrativa, surgiendo de esto un verdadero conflicto; que, según el artículo 80 de las referidas Ordenanzas, los terratenientes de la huerta cuyas tierras están contiguas a las acequias y brazales mayores, deben dejar cuatro palmos de terreno sin cultivar para el paso libre de los cequeros y seguidores del agua, si éste paso no es practicable por los mencionados cajeros, por cuyo motivo el acuerdo de la Junta no podía efectar a propiedad particular, y que si el demandante Mestre entendia que se creaba en la suya una servidumbre forzosa ó alguna limitacion ó gravámen, de-

bió acudir en alzada ante el Gobernador civil de la provincia, y contra la providencia de éste, si lo estimaba procedente, á la vía contencioso administrativa, conforme al art. 251, párrafo primero, y art. 253, número 3.º de la repetida ley de Aguas; que los acuerdos relativos al disfrute, régimen y policía de las aguas de aprovechamientos comunales de riego, han sido en todos tiempos atribución peculiar de los Ayuntamientos ó de los Sindicatos ó Tribunales especiales, donde existen con Ordenanzas legalmente establecidas, siendo, por lo tanto, incontrovertible, que el asunto de que se trata es por razón de la materia de carácter administrativo y propio del conocimiento de las Autoridades de este orden, según jurisprudencia constante sentada en ininidad de Reales decretos, entre otros, en los de 28 de Junio de 1879 y 13 de Febrero de 1885, toda vez que el puente fué construido dentro del terreno á que alcanza la jurisdicción de la Junta de cequiaje:

Que sustanciado el incidente, la Sala primera de lo civil de la Audiencia de Barcelona dictó auto declarándose competente, alegando que el art. 252 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, al prohibir la admisión de interdictos contra providencias administrativas, se refiere única y exclusivamente á las dictadas por la Administración dentro del círculo de sus atribuciones, y con igual limitación había de entender la prescripción del art. 251 en su párrafo primero, que cualesquiera que sean las atribuciones que competan á la Junta de cequiaje de la ciudad de Lérida por virtud de lo dispuesto en el art. 237 de la citada ley y de las Ordenanzas porque se rige, de ninguna manera podía entenderse autorizaba para conceder la construcción de puentes que lastimen intereses exclusivamente particulares, conforme se infiere claramente de lo establecido en resolución de 25 de Agosto de 1849, decisoria de una competencia; y como quiera que lo que había motivado este interdicto consistía precisamente en haber el demandado lastimado los derechos de la propiedad particular del actor con la construcción del puente de que se trataba, era evidente que el acuerdo de la Junta de cequiaje, que la autorizó, no se hallaba dentro del círculo de sus atribuciones, y que por ello no eran de aplicación en el presente caso los citados artículos 251 y 252 de la ley de Aguas; que, por otra parte, la Junta no ordenó la construcción de dicho puente, sino que se concretó á autorizar á Arnau para construir uno sobre el brazal cosser, al efecto de facilitar el paso á su finca y no determinó el punto en que debiera levantarse; de manera, que el interdicto no iba dirigido contra la autorización concedida por la Junta, sino contra el demandado Arnau, por los términos en que usó de ella, lastimando intereses particulares del actor; que no tratándose de la imposición de ninguna servidumbre forzosa ni de otra limitación ó gravamen de los previstos por la ley, no era tampoco aplicable á la cuestión actual el art. 253 en su párrafo tercero de dicha ley; y que además, según el art. 256 de la misma, compete á los Tribunales de justicia el conocimiento de las cuestiones relativas á daños y perjuicios ocasionados á tercero en sus derechos de propiedad particular, cuya enajenación no sea forzosa, y á esa clase de cuestiones pertenecía la debatida en este juicio. La sala citaba además los artículos 12 y 16 del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo ex-

puesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites;

Visto el cap. 13 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, cuyo epígrafe es el siguiente: «De la comunidad de regantes y sus Sindicatos y de los Jurados de riego», y señaladamente sus artículos 230, 231 y 237, que establecen que toda comunidad tendrá un Sindicato elegido por ella y encargado de la ejecución de las Ordenanzas y de los acuerdos de la misma comunidad de regantes formarán las Ordenanzas con arreglo á las bases establecidas por la ley, sometiendo á la aprobación del Gobierno; que serán atribuciones del Sindicato vigilar los intereses de la comunidad, promover su desarrollo y defender sus derechos, dictar las disposiciones convenientes para la mejor distribución de las aguas, y además todas las que le concedan las Ordenanzas de la comunidad ó el reglamento especial del mismo Sindicato, concluyente con la prescripción siguiente: «Las resoluciones que adopten los Sindicatos de riego dentro de sus ordenanzas, cuando procedan como delegados de la Administración, serán reclamables ante los Ayuntamientos ó ante los Gobernadores de provincia, según los casos.»

Considerando:

1.º Que la presente contienda de competencia versa sobre el hecho de haber construido D. Jaime Arnau y Moncasi un puente sobre el brazal cosser con autorización de la Junta de cequiaje de Lérida, pues aunque el interdicto interpuesto por Don Ramon Mestre se refería también á la posesión de un camino del que se creía el demandante único dueño, el oficio de requerimiento del Gobernador comprende únicamente el hecho concreto de la construcción del puente y la procedencia de la autorización dada por la Junta, y en estos términos debe considerarse planteado el conflicto que se ha de resolver:

2.º Que las acequias de la ciudad de Lérida se hallan bajo el gobierno y administración de una Junta llamada de cequiaje, sujeta á las prescripciones que consignan sus Ordenanzas debidamente aprobadas, y que, en este concepto, las cuestiones que se refieren al gobierno y dirección de las expresadas acequias deben resolverse en primer término por las disposiciones de las propias Ordenanzas, ó sea por la Junta según los preceptos citados, y salvo los recursos que correspondan:

3.º Que estos recursos no pueden ser otros, con arreglo á las doctrinas que contiene el párrafo último del artículo 237 de la ley de Aguas vigente, que el administrativo ante la Autoridad competente de este orden, cuando los acuerdos del Sindicato, ó de la Junta en su caso, recaigan sobre materias en que aquéllos obren como Delegados de la Administración:

4.º Que tal carácter revisten los acuerdos que dichas Corporaciones adopten en uso de las atribuciones que en su favor consignan el propio art. 237, y en consonancia con las disposiciones de las Ordenanzas en la ejecución de obras en las acequias, extremo sobre que recae el interdicto de que se trata.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la administración

Dado en Palacio á once de Enero de mil ochocientos noventa y tres.— María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

(G. núm. 24.)

MINISTERIO DE FOMENTO

«Habiéndose cometido una omisión de copia en la Real orden publicada en la *Gaceta* de 14 del actual, se reproduce á continuación debidamente subsanada dicha falta.»

REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado emite el siguiente informe:

«De Real orden, comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., ha sido remitida á informe de la Sección de Gobernación y Fomento de este Consejo la instancia presentada por D. Eduardo Lopez y Lopez, concesionario con otros señores de la patente de invención expedida en 19 de Marzo de 1885, relativa á un procedimiento para quitar al papel ordinario la propiedad de inflamarse al contacto de la llama, conservándole todas las demás que le son propias, dotándole por consiguiente de mejores condiciones para los diversos usos de la vida,» con el fin de que se le admita al pago que corresponde á la octava anualidad, no obstante haber expirado el plazo de su vencimiento.

En la instancia presentada hace constar D. Eduardo López que, en unión de otros señores obtuvo patente de invención en 19 de Marzo de 1885 del invento que queda referido, y desde aquella fecha viene pagando la cuota correspondiente; pero que en el presente año, al ir á efectuar el pago el día 21 de Marzo, no se le admitió por haber transcurrido el plazo, legal y no habiéndolo hecho en los días 19 y 20 por ser festivos, solicita se declare hábil el día en que se presentó, á cuyo fin acompaña 80 pesetas en papel de pagos al Estado, importe de la cuota anual de patente.

El Negociado correspondiente de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio expone que no es la primera vez que se han suscitado dudas sobre el particular, y aunque se ha procurado resolverlas conciliando los preceptos de la ley y el beneficio público, precisa dar una resolución con carácter permanente que evite posibles abusos; que del art. 14 de la ley de 30 de Julio de 1878, que dice: «las cuotas anuales que es preciso abonar para hacer uso de una patente se han de pagar *anticipadamente*,» y el 46 de la misma, en su caso 2.º, que preceptúa que «caducarán las patentes de su invención cuando el poseedor no pague la correspondiente anualidad *antes de comenzar* cada uno de los años de su duración,» se infieren dos dudas: la primera, respecto al día en que empieza á contarse el año de la duración de una patente, y la segunda, referente al día de su vencimiento.

Entiende en el primer caso las cuotas anuales de una patente han de abonarse antes de comenzar el siguiente año; pero que, sin embargo, es común el entender que el uso de las patentes no empieza al comenzar el día natural de su expedición, sino en un momento indeterminado, de él, en el cual terminan en los años siguientes los sucesivos de su posesión; aceptando este criterio, el mismo día de la expedición de una patente será el último hábil para aceptar los pagos anticipados de que habla la ley, por más que no siempre se ha conceptuado así, como lo prueban resoluciones que tiene á la vista y los anuncios de vencimientos publicados en el *Boletín de la propiedad industrial*.

Respecto á determinar el día del vencimiento cuando éste ó éste y los que le siguen sean festivos, tiene también sus dudas el Negociado.

En otros asuntos, para la realización de los cuales se fijan también,

son opuestas las disposiciones legales si bien en el orden administrativo es de carácter general que los plazos que terminen en día festivo se consideren prorrogados hasta el primer día hábil.

Queriendo en otro tiempo conciliar la oficina de Patentes el precepto legal y el interés privado, juzgó que los concesionarios de patentes podrían utilizar para hacer el pago hasta las doce de la noche, y para facilitar el pago estableció un buzón para el depósito del papel de pagos correspondiente á anualidades vencidas en días festivos, ó en los laborables fuera de las horas de servicio público.

Sin embargo, la existencia del buzón no es de todos conocida, ni fué objeto de disposición legal, por lo que se han suscitado reclamaciones análogas á la presente.

Por último, propone el Negociado que el día de la expedición de la patente sirva de regulador para el pago de las anualidades; que siendo festivo el día ó días siguientes al vencimiento, se prorrogue el plazo hasta el primer día hábil; que puesto acepta el criterio más favorable al público de estimar como día del vencimiento el de la expedición de las patentes, aquel solo debe tener derecho á la admisión de los pagos durante las horas reglamentarias de oficina, y que se admita el pago de las 80 pesetas que acompaña á la instancia de D. Eduardo Lopez, que ha motivado este expediente.

Esta Sección encuentra muy fundadas las consideraciones que quedan expuestas como medio de dar carácter general y de fijeza á la estimación de los plazos y forma en que ha de verificarse el pago de las patentes, procurando evitar que por la incertidumbre que hasta ahora reinaba en la materia puedan repetirse casos análogos al presente.

Es conforme á lo preceptuado en la ley de 30 de Julio de 1878, que el mismo día en que se expida el título de la patente, comienza á contarse el año para el efecto del pago de la nulidad que corresponda, y que por consecuencia venza el año en igual día del siguiente; pero como puede ocurrir que este último sea festivo, es justo que el particular tenga facilidad de hacer el pago en el primer día hábil y en las horas reglamentarias de servicio público, sin necesidad de recurrir al establecimiento de un buzón ni otros medios extraordinarios que no pueden fácilmente ser de todos conocidos; y finalmente, en deducción de lo expuesto, que habiendo hecho la consignación de las 80 pesetas don Eduardo Lopez, correspondientes al año actual, el día 21 de Marzo por ser festivos los dos anteriores, le sea admitido el pago.

Por estas consideraciones, la Sección, de acuerdo con lo propuesto por el Negociado respectivo de ese Ministerio, tiene el honor de proponer á V. E.:

1.º Que la fecha de la expedición de un título de patente regula los pagos en los años sucesivos, y por consiguiente, que el mismo día de cada uno de estos años es el último hábil para admitirlos.

2.º Que cuando el día del vencimiento ó éste y los que le siguen sean festivos, deben prorrogarse los plazos hasta el primer día hábil.

3.º Que el público sólo podrá hacer el pago durante las horas reglamentarias de oficina.

Y 4.º Que se admita á D. Eduardo Lopez el pago de las 80 pesetas que como ingreso de la octava cuota anual acompaña á la instancia de 21 de Marzo del presente año.»

Y conformándose S. M. el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el presente dic-

támen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Enero de 1893.—Moret—Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio.

(G. núm. 22).

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado

Imo. Sr.: En el recurso gubernativo promovido por el Notario D. Mariano del Pozo Martín contra la negativa del Registrador de la propiedad de Getafe á inscribir cierta escritura, pendiente en este Centro en virtud de alzada del Registrador:

Resultando que por escritura que autorizó el Notario D. Mariano del Pozo y Martín en el lugar de Carabanchel, á 31 de Agosto de 1891, y otorgaron, de una parte, D. José Ucendo y García, acompañado de su mujer doña Remigia Pingarrón y Gianzo, y de otra doña Carmen Gianzo Pérez y doña Antonina Hernández Gianzo, asistidas de sus respectivos maridos, éstas prorrogaron un crédito hipotecario que tenían contra el Ucendo García; doña Remigia Pingarrón canceló una hipoteca que garantizaba su dote y parafenales, y bajo ambos supuestos vendió D. José Ucendo, con pacto de retro, la mitad de una casa tahona, de su propiedad, gravada hasta el día del contrato con las dos hipotecas de que se ha hecho mención:

Resultando que al redactar ese instrumento el Notario que lo autorizó, relacionó la segunda carga del inmueble de este modo: «Por escritura que Doña Carmen Gianzo Pérez y Doña Antonina Hernández Gianzo, con licencia de sus esposos, ya nombrados, celebraron en 31 de Agosto de 1888, ante el presente Notario, de una parte, y D. José Ucendo y Doña Remigia Pingarrón de otra, el Sr. Ucendo aseguró y confesó que previamente á aquel acto había recibido en calidad de préstamo reintegrable de dichas Doña Carmen y Doña Antonina Hernández á partes iguales, la cantidad de 4.500 pesetas, igual á 18.000 reales vellón; se pactó que el Sr. Ucendo devolvería expresada cantidad á las prestatarias en el interregno que media desde el día en que se otorgaba la escritura de que se viene haciendo mérito hasta el 1.º de Septiembre de este año de 1891; que si transcurria este plazo ó esta fecha sin haberse realizado el pago de la cantidad debida, doña Carmen Gianzo y doña Antonina Hernández, ó quien su derecho representase, le tendrían á vender la finca para reembolsar la cantidad que adelantaron; que no estipularon cantidad alguna por vía de rédito ó intereses, ni tampoco para atender á las costas, gastos, daños y perjuicios que pudieran resultar, etc.» y extendió la primera estipulación en los siguientes términos: «Doña Carmen Gianzo Pérez y doña Antonina Pingarrón y Gianzo conceden á D. José Ucendo García, ó quien su derecho haya, la prórroga de dos años, ó sea hasta el día 1.º de Septiembre de 1893, para la cobranza de las 4.500 pesetas que le dieron á préstamo, según va expresado anteriormente»:

Resultando que presentado ese documento en el Registro de la propiedad de Getafe, fué suspendida su inscripción: 1.º, por haber contradicción en la cláusula en que se describe la segunda carga de la finca, ya que una vez se apellida á Doña Carmen Gianzo Pérez, y otra Hernández; y 2.º,

porque dueñas del crédito Doña Carmen Gianzo Pérez y Doña Antonina Hernández Gianzo, conceden la prórroga aquella, y Doña Antonina Pingarrón y Gianzo, siendo, pues, evidente, no solo la falta de personalidad de esta última, sino también la falta de consentimiento de Doña Antonina Hernández Gianzo, dueña, según el Registro, de la mitad del crédito:

Resultando que esa calificación motivó el presente recurso, deducido por el Notario D. Mariano del Pozo, con el intento de que se declare que el documento en cuestión está redactado en legal forma, y en pro de su demanda alegó: que comprendiendo la escritura tres actos, el de prórroga de hipoteca, el de cancelación de otra y el de venta á retro, solo del primero se ocupa el Registrador en su nota, y prescinde de los otros dos, ya para inscribirlos, ya para denegarlos, conducta que se deja á la consideración de quienes han de conocer de ese expediente; que en la relación de la segunda carga no existe la contradicción que supone el Registrador, puesto que tanto en la comparecencia de la escritura como en el mismo aludido párrafo, designase á dicha señora con los dos apellidos de Gianzo Pérez, que son los suyos; que es verdad que al redactar la primera estipulación se incidió en el error material de apellidar á doña Antonina Pingarrón, llamándose Hernández, más el contexto todo de la escritura identifica á dicha otorgante, en términos que no se concibe haya dado el Registrador tanta importancia á dicha equivocación, máxime cuando ésta queda totalmente deshecha en la firma del documento, donde aparece la doña Antonina con su verdadero apellido; que, según el Registro, la primitiva escritura hipotecaria, y aun la misma, asunto de este recurso, resulta plenamente comprobado, son dueñas del crédito doña Carmen Gianzo y doña Antonina Hernández, y que ellas son las que otorgan la prórroga; luego no cabiendo duda racional acerca de la identidad de ambas interesadas, es pertinente al caso la doctrina de las Resoluciones de 9 de Enero de 1886 y 27 de Marzo de 1890:

Resultando que cido el Registrador, informó insistiendo en su calificación y ampliando las razones que la abonan, y añadió: que, consecuencia, según el contrato, la cancelación de la hipoteca y la venta á retro de la prórroga que otorgaban Doña Carmen Gianzo y Doña Antonina Hernández, no siendo ésta inscribible, es llano que tampoco lo son los otros dos actos; que confesados por el mismo Notario los errores que padeció al redactar la escritura, queda demostrada la confusión que en ésta existe é impide su inscripción; que las dos Resoluciones que el recurrente cita son inaplicables á un caso como el actual en que no se trata de una diferencia en una vocal ó en el segundo nombre de una persona, sino en todo el primer apellido, de quien en calidad de dueño prórroga un crédito; y, por último, que vienen á robustecer la nota las Resoluciones de 22 de Diciembre de 1875, 10 de Marzo y 29 de Noviembre de 1881, 23 de Junio de 1884 y 30 de Septiembre de 1891:

Resultando que el Juez delegado revocó la nota y declaró inscribible el documento, por considerar: que el haberse designado á Doña Carmen Gianzo Pérez y á Doña Antonina Hernández Gianzo bajo el común apellido de esta última al reseñar las cargas de la finca, es un simple error material, que no impide resulte claramente de la escritura que las expresadas señoras fueron las que prestaron una cantidad al señor Ucendo; que el otro error padecido al redactar la primera estipulación tampoco puede motivar la sus-

pension del título, toda vez que del contexto de la escritura y de los antecedentes del Registro infiérese la cabal identificación de las otorgantes; y, finalmente, que es doctrina de la Dirección la de que son inscribibles los documentos que adolecen de algún error material en la designación de los nombres de los otorgantes, siempre que por otras circunstancias, ó por los antecedentes del Registro, se identifique la personalidad, de suerte que no quepa duda racional acerca de que el que transmite el derecho es el mismo que lo tiene inscrito:

Resultando que remitido el recurso á la Superioridad en alzada del Registrador, fué confirmado el auto apelado por sus mismos fundamentos:

Considerando que la cláusula de la escritura en que se describe la segunda carga de la finca no es contradictoria, como pretende el Registrador de Getafe en la primera parte de su nota, puesto que relacionándose en ella la escritura de 31 de Agosto de 1888, que se afirma fué otorgada por doña Carmen Gianzo Pérez y doña Antonina Hernández Gianzo, es claro que, cuando poco después, refiriéndose á las mismas otorgantes, las designa el Notario de este modo: «Dichas doña Carmen y doña Antonina Hernández», no cambia el primer apellido de aquella, sin lo que la palabra *dichas* carecería de sentido, tanto más, cuanto que pocas líneas más abajo vuelve á mencionarse á la referida interesada estampando su nombre y apellido en la propia forma que al principio de la cláusula; de todo lo cual se colige que no cabe duda alguna acerca de que la verdadera dueña de la mitad del crédito en cuestión era doña Carmen Gianzo y Pérez:

Considerando que en la primera estipulación de la escritura aparece otorgando la prórroga de la hipoteca Doña Antonina Pingarrón y Gianzo; y como quiera que en el resto del documento la que figura como otorgante es Doña Antonina Hernández Gianzo, á cuyo nombre está inscrito el crédito, existe, á no dudar, un error que ha servido al Registrador para formular el segundo motivo de su nota, error cuya importancia conviene dilucidar en la presente resolución:

Considerando que cometido el error en parte tan esencial del instrumento, cual lo es la estipulación, pudiera inducir á la creencia de que, quien verdaderamente consintió el contrato fué la Doña Antonina Pingarrón, lo cual argüiría falta de identificación en la persona de una de las otorgantes, y es fuerza aquilatar, en vista del documento todo, el fundamento de tal creencia, para en su virtud decidir si esa falta es real ó imaginaria:

Considerando que otorgado en un solo acto el contrato en cuestión, no cabe admitir solución alguna de continuidad entre la comparecencia y la firma del instrumento; y habiendo perfecta congruencia entre los comparecientes y los firmantes, figurando al ingreso del documento Doña Antonina Hernández Gianzo, que es la que al final firma con los demás otorgantes, los testigos y el Notario, y danó éste fe del conocimiento de aquella y de que en efecto suscribió el contrato, es de todo punto inverosímil que fuese una persona distinta la que estipuló la primera cláusula:

Considerando que prueba este razonamiento que todo el alcance que hay que reconocer en el error de que se trata, es el de una mera equivocación material, que arguye seguramente poco esmero por parte del Notario en la redacción del instrumento, pero que no autoriza á concluir, como el Registrador concluye, que falta el consentimiento de una de las dueñas del crédito; pues para esto fuera preciso que exis-

tiendo en efecto la doña Antonina Pingarrón Gianzo, hubiera intervenido en el acto de la estipulación á ciencia y conciencia de los demás otorgantes, de los testigos y del Notario; lo cual revelarían en los primeros el deliberado propósito de verificar un acto nulo, cosa de todo punto inadmisibles por absurda.

Considerando que tampoco puede oponerse á la doctrina expuesta la alegación de que inscrito el contrato como otorgado por Doña Antonina Hernández Gianzo no guardará conformidad con el título, y sin embargo en el cuerpo de la inscripción habrá que afirmar esa conformidad; ya que descartado el error material no es aventurado afirmar que la que consintió verdaderamente el contrato fué la Doña Antonina Hernández, que al efecto compareció ante el Notario previa licencia marital, expuso los títulos mediante que tenía una participación en el crédito que afectaba á la casa tahona, manifestó en los antecedentes de la escritura que su propósito era otorgar una prórroga al deudor y firmó el instrumento en que aparecía tal prórroga como condición inexcusable del contrato;

Esta Dirección general ha resuelto confirmar la providencia apelada y lo acordado.

Lo que con devolución del expediente original manifiesto á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 1892.—El Director general, Antonio Mollada.—señor Presidente de la Audiencia de Madrid. (G. núm. 21.)

MINISTERIO DE LA GUERRA

REALES DECRETOS

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Presidente de la Junta consultiva de Guerra al Teniente General don José Laureano Sanz y Posse, Marqués de San Juan de Puerto Rico, que actualmente desempeña el cargo de Inspector general de Carabineros.

Dado en Palacio á veinte de Enero de mil ochocientos noventa y tres.—María Cristina.—El Ministro de la Guerra, José Lopez Dominguez.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Presidente de la primera Sección de la Junta Consultiva de Guerra al Teniente General don Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, Marqués de Estella, que actualmente desempeña el cargo de Inspector general de Infantería.

Dado en Palacio á veinte de Enero de mil ochocientos noventa y tres.—María Cristina.—El Ministro de la Guerra, José Lopez Dominguez.

En virtud de la nueva organización dada al Ministerio de la Guerra por Mi decreto de 18 del mes del actual; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Secretario de la Dirección general de Carabineros al General de Arigada don Luis Martínez Monje y Puga, que actualmente desempeña igual cargo en la suprimida Inspección general de dicho Instituto.

Dado en Palacio á veinte de Enero de mil ochocientos noventa y tres.—María Cristina.—El Ministro de la Guerra, José Lopez Dominguez.

(G. núm. 21)

ANUNCIOS OFICIALES

ADMINISTRACION

DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE ORENSE

Recaudaciones

Don Francisco Alvarez Freigido, recaudador de contribuciones del Ayuntamiento de Piñor de Cea.

Hago saber: que la cobranza voluntaria de las contribuciones territorial é industrial correspondiente al tercer trimestre del actual año económico, tendrá lugar el mes entrante de Febrero los días 18, 19, 20 y 21.

Lo que se hace público para todos los contribuyentes vecinos y forasteros.

Piñor 24 de Enero de 1893.—El recaudador, Francisco Alvarez.

Don Manuel Montes, recaudador de contribuciones de territorial é industrial de la zona de Bande.

Hago público: que la recaudación correspondiente al tercer trimestre de 1892-93 tendrá lugar los días 1, 2, 3, 4 y 5 Muíños y Lobera; 7, 8, 9, 10 y 11 Lóbios y Vereá; 13, 14, 15 y 16 Entrimo; 17, 18, 19, 20 y 21 Padrenda, y 6, 7, 8, 9 y 10 Bande.

Asimismo se hace saber que transcurridos que sean dichos días podrán los contribuyentes satisfacer sus cuotas sin recargo durante los diez primeros días del mes de Marzo próximo en la cabeza de la zona.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33 de la Instrucción vigente de recaudación de 12 de Mayo de 1888.

Bande 24 de Enero de 1893.—Manuel Montes.

Don Manuel Rodriguez, Recaudador de contribuciones del Ayuntamiento de Villar de Santos.

Hago saber: que durante los días 4 y 5 del próximo mes de Febrero se dará principio á la cobranza de las contribuciones territorial é industrial en el Ayuntamiento de Villar de Santos, correspondiente al tercer trimestre del corriente ejercicio y del 6 al 10 del propio mes en el de Rairiz.

Lo que se hace público para conocimiento de los contribuyentes domiciliados en los mismos con arreglo á Instrucción. Orense 25 de Enero de 1893.—Manuel Rodriguez.

Don José Ramon Perez, Recaudador de las zonas de Ginzo, Sandianes, Trasmiras y Moreiras.

Hago saber: Que la cobranza vo-

luntaria de las contribuciones territorial é industrial, correspondiente al tercer trimestre del actual año económico, tendrá lugar en el mes entrante, en los días y horas que al final se expresa.

Adviértese á los contribuyentes que exijan del Recaudador el talon-recibo firmado y sellado, por ser el único documento que justifica haber satisfecho sus adeudos, no admitiendo bajo pretexto alguno los manuscritos ó provisionales.

Ginzo de Limia 22 de Enero de 1893.—El Recaudador, José Ramon Perez.

Sandianes: los días 4, 5 y 6 de Febrero de ocho á doce de la mañana y de dos á cinco de la tarde.

Trasmiras: los días 7, 8, 9 y 10 de idem, idem.

Moreiras: los días 15, 16 y 17 de idem, idem.

Ginzo: los días 18, 19, 20, 21 y 22 de idem, idem.

La cobranza de las de territorial é industrial correspondiente al tercer trimestre del corriente ejercicio de 1892-93 tendrá lugar del uno al siete del próximo mes de Febrero.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en la instrucción vigente se hace público para conocimiento de todos los contribuyentes afectos al mismo para el pago de sus cuotas.

Vega 22 Enero 1893.—El Recaudador, Pedro Vidal.

Don Cesareo Parada, Recaudador de contribuciones de territorial é industrial de la zona de Allariz.

Hago público: que la recaudación correspondiente al tercer trimestre de 1892-93 tendrá lugar los días 8, 9, 10 y 11 Esgos, Paderne y Junquera de Espadañedo 17, 18 y 19 y Maceda y Baños de Molgas 21, 22, 23 y 24.

Asimismo se hace saber á los contribuyentes por los conceptos arriba indicados en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 33 de la Instrucción de Recaudadores de 12 de Mayo de 1888.

Esgos 24 de Enero de 1893.—Cesareo Parada.

El que suscribe, Recaudador de las contribuciones directas del antiguo partido de Viana del Bollo: hace saber que la cobranza de las cuotas por territorial é industrial del tercer trimestre del actual ejercicio, tendrá lugar en los pueblos y por las mismas personas que realizaron los de los anteriores trimestres y en los días que á la continuación se expresan.

Ayuntamiento del Bollo, los días 4, 5, 6 y 7 de Febrero.

Idem de la Gudiña, los días 4, 5 y 6 de idem.

Idem de la Mezquita, los días 7, 8 y 9 idem.

Idem, de Viana, los días 15, 16, 17, 18 y 19 de idem.

Idem de Villarino de Conso, los días 10, 11 y 12 de idem.

Viana del Bollo Enero 21 de 1893.

—Juan Manuel Arias.

HOSPITAL PROVINCIAL

Estado que se publica en virtud de la circular del señor Gobernador inserta en el *Boletín* de 6 de Junio de 1892, y la cual deben tener muy presente los Señores Alcaldes y Secretarios, para evitar responsabilidades.

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA DE ORENSE AÑO ECONOMICO DE 1892-93

Mes de Enero

Estado demostrativo de los enfermos civiles de caridad existentes en la Hospital el día de la fecha, con expresión del número de vacantes que existen en virtud de lo acordado por la Comisión provincial en sesión de 15 de Marzo último.

Número de camas disponibles, según el acuerdo. 74
Idem de enfermos de caridad hasta el día. 80

Exceso en camas supletorias. 6

Orense 25 de Enero de 1893.—El Director, Narciso Serantes.

AYUNTAMIENTOS

BALTAR

Presentada por el cuentadante don Bernardino Perez, la de fondos municipales de este distrito y año económico de 1891-92, y fijadas por el Ayuntamiento definitivamente, estará de manifiesto en la Secretaría municipal con todos sus justificantes, por término de quince días contados desde el siguiente al en que aparezca inserto el presente en el *Boletín oficial* de la provincia, para que puedan examinarlas cuantos lo tuvieren por conveniente y producir ó hacer las observaciones que creyeran justas y pasado el plazo dicho no serán admitidas.

Baltar Enero 22 de 1893.—El Alcalde, José Lorenzo.

SAN JUAN DE RIO

Fijadas por la Corporación municipal de este Ayuntamiento las cuentas de caudales del mismo, relativas al último año económico de 1891-92, rendidas por el Depositario don Manuel García Luna, se exponen al público con todos los documentos que las justifican, poniéndolas de manifiesto en la Secretaría por término de quince días contados desde el siguiente al en que este edicto se halle inserto en el *Boletín oficial*, con el fin de que todo vecino pueda enterarse de ellas y presentar en dicho término cuantas observaciones y reclamaciones tengan por convenientes.

Asimismo se exponen al público por igual tiempo y á los mismos fines los presupuestos municipales siguientes: El adicional y refundido de ingresos y gastos para el corriente ejercicio y el ordinario para el siguiente, que se hallan formados por la correspondiente Comisión.

San Juan de Rio Enero 23 de 1893.—El Alcalde, Manuel Sabin.

ANUNCIOS

LA COMPAÑIA FABRIL SINGER

Orense.—Progreso, 36

MAQUINAS PARA COSER

Las seis grandes fábricas que tiene establecidas en América y Europa la Compañía Fabril SINGER y que ya once millones de máquinas revela bien á las claras la marcada predilección que el público de ambos continentes demuestra por las máquinas SINGER.

Entre los hermosísimos modelos que dieron justa fama á esta fabricación descuella la nueva *Lanzadera vibrante*. Desprovista de engranes y de fácil manejo, es la más ligera, la que menos ruido hace, la de más sencillo mecanismo y con la que pueden ejecutarse primorosas labores.

A pesetas 2'50 por semana

Grandes descuentos al contado. Comisionados para la venta y cobros en los principales pueblos de la provincia.

CARRETES DE HILO

Torzales de seda.—Agujas, aceite. Piezas sueltas y accesorios para toda clase de costura. Pídanse catálogos ilustrados que se dan gratis.

VIDES AMERICANAS

DE LOS CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA

Los que deseen adquirir de estas hermosas vides cuya resistencia contra la filoxera y otras enfermedades criptogámicas está reconocida, pueden remitir sus pedidos al representante en esta región D. Roberto Justo Novoa, calle de Colon, núm. 20, Orense.

Conviene no descuidarse á evitar que se agoten las existencias.

A LOS ENFERMOS

DE LOS OJOS

Llegó el renombrado especialista en las enfermedades de la vista Don M. Marban. Tiene su Clínica Oftalmológica en la calle de Hernán Cortés, número 7.

Horas de consulta, desde las diez de la mañana en adelante.

Coloca y vende ojos artificiales. NOTA. En la primera visita serán desengañados los que no tengan remedio.—9.

VENTA

A voluntad de su dueño se vende la mitad de la casa señalada con el número 33, en la calle de Santo Domingo de esta ciudad, con su patio ó resío: dará razón el Procurador Berjano.—70

MARCADOR

se necesita uno en la imprenta de este periódico.

Imprenta LA POPULAR